



## Novedades sociopolíticas en Baleares

Enric Tello

Las Islas Baleares son testigo de dos novedades políticas y sociales recientes que conviene reseñar. La primera es la emergencia en la consciencia pública de la íntima conexión entre los problemas económicos, ambientales y sociales de un modelo de desarrollo insostenible que nos conduce hacia un callejón sin salida. El cambio de ese modelo y la reorientación de la economía hacia una mayor sostenibilidad ecológica ya están en el centro de la discusión política en Formentera, Eivissa, Menorca y Mallorca.

De momento no lo está en ninguna otra comunidad autónoma del Estado español, donde las percepciones y los comportamientos fluctúan aún entre la mera defensa a ultranza de la economía “realmente existente”, como si fuera la única posible –Doñana, Nerva o Itoiz son algunos ejemplos emblemáticos de esa actitud reactiva ante el desafío ambiental–, y el tanteo de actitudes algo más adaptativas, mediante fórmulas que pretenden alcanzar sobre el papel algún tipo de *compatibilidad* entre el “crecimiento económico”, la “preservación ambiental” y la “cohesión social”.

Para hacer “compatibles” las tres cosas se propicia la búsqueda de sucesivos compromisos (*trade-offs*) en los que cada parte ceda por lo menos un poco. Las administraciones públicas se erigen así en árbitros de una “puesta al día” de las empresas que, simultáneamente, permita convertir el desafío ecológico en nuevas oportunidades de negocio. Una parte del mundo empresarial se ve obligado a incluir en sus costes o inversiones nuevos gastos de reparación

*Emerge en la consciencia pública la íntima conexión entre los problemas económicos, ambientales y sociales de un modelo de desarrollo insostenible*

Este artículo fue publicado, como editorial, en el número 75 de la revista *Mientras tanto*.

ambiental, como depuradoras y sistemas de control. A la vez, otras empresas pueden ampliar su facturación vendiendo esos mismos dispositivos. Pero en la base de esas respuestas adaptativas subyace una visión equivocada –o quizá interesadamente equívoca– de la situación real: que las demandas ecológicas, económicas y sociales de nuestro tiempo responden a problemas separados que es posible “armonizar” en alguna solución de compromiso. En ese planteamiento, la raíz íntima que une las tres dimensiones permanece sin desvelar, lo que suele propiciar la búsqueda de fórmulas autocontradictorias, como la del “crecimiento sostenible”.

La trabazón entre los problemas económicos, ecológicos y sociales sólo comienza a salir a la luz allí donde aparecen con claridad los límites del modelo depredador que los origina, y donde se perciben los síntomas de su agotamiento económico. Sólo entonces se empieza a cuestionar de verdad el modelo de desarrollo y a buscar alternativas reales. Cuando se produce esa *percepción social de los límites económico-ecológicos*, el medio ambiente deja de considerarse un problema “sectorial” para convertirse en una cuestión ciudadana de primer orden. Eso es lo que empieza a ocurrir ante la opinión pública en las islas Baleares (y quizá en alguna de las islas Canarias, como Lanzarote). No es casualidad que se trate de economías insulares con recursos perceptiblemente escasos y abrumadoramente dependientes de un turismo de masas que está destruyendo la gallina de los huevos de oro.

*No es casualidad que se trate de economías insulares con recursos escasos y dependientes de un turismo de masas que está destruyendo la gallina de los huevos de oro*

El turismo de sol y playa, que ha sembrado tantas primeras líneas de costa con apartamentos infectos, tiene un futuro económico cada vez más incierto. A su devastación paisajística y ambiental se le suma ahora la presión creciente de una nueva oleada, supuestamente de mayor “calidad”, que intenta colonizar el interior con residencias de baja densidad y campos de golf –cuyo impacto ecológico y territorial es mayor aún que los bloques de cemento– mientras instala cada vez más puertos deportivos para que esos turistas ricos aparquen sus lanchas motoras con las que acceder a rincones todavía “vírgenes” (que dejan de serlo rápidamente). Tras el sensato objetivo de la “desestacionalización” turística se esconde la amenaza real de las *flying communities*, integradas por exquisitos ejecutivos y profesionales norteamericanos, que viven a caballo de Frankfurt, Londres, París o Bruselas y la costa mediterránea. El de Palma de Mallorca ya es, de largo, el mayor aeropuerto de España y el que registra mayor tránsito. El consumo eléctrico se dispara, llevando hasta sus límites a un sistema de generación obso-

leto basado aún en el carbón. El agua escasea y su calidad se deteriora por la sobreexplotación de acuíferos y unos vertidos que superan ampliamente la capacidad de las precarias instalaciones de depuración. El infarto de los residuos y el conflicto de la incineración están al orden del día. El infarto circulatorio y la presión para construir más autopistas, también.

*L'illa de la calma* la está perdiendo a marchas forzadas. La sostenibilidad es *el* problema, y el horizonte para cualquier solución. Cabe pensar, claro está, que la relevancia adquirida por la cuestión ambiental en la política diaria es el mero resultado de haber traspasado tantos límites. Pero la traducción de los deterioros ambientales en respuestas culturales y políticas es más compleja. En Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera (como también en Lanzarote) aún queda bastante por conservar. Bastante más, por ejemplo, que en la mayor parte de la costa catalana, levantina y murciana. La reacción social que dice “basta” –“ni una cama más”, como en Lanzarote–, y reclama cambios en profundidad, surge tanto de la consciencia de lo perdido como de la valoración de lo que aún se puede salvar. Es una reacción *socioecológica*, que sólo puede generarse y fructificar mediante la labor culturalmente mediadora de determinados grupos humanos y de colectivos ciudadanos que traducen la percepción del deterioro, y la esperanza de salvar lo que queda, en respuestas sociales efectivas.

Las nutridas manifestaciones convocadas en 1998 y 1999 por el Grup d'Ornitologia Balear (GOB), las asociaciones de vecinos y otras entidades ciudadanas en favor de una moratoria urbanística en Mallorca (30.000 personas), Menorca (5.000) y Eivissa (11.000), o los tímidos gestos hacia la reconversión a otro modelo turístico más sostenible iniciados por el ayuntamiento de Calvià con su Agenda 21 Local –pionera en todo el Estado español–, dan testimonio de ese fermento social sin el cual no puede entenderse bien la segunda novedad política de este verano de 1999: la aparición de una “izquierda plural” capaz de coger el toro por los cuernos para desbancar al Partido Popular del parlamento y del gobierno balear y, con él, a las poderosas familias de siempre.

Un acuerdo de reparto de papeles con el pequeño partido de centro-derecha Unió Mallorquina –por el que UM gobierna con el partido nacionalista de centro-izquierda, PSM, el Consell Insular de Mallorca y, a cambio de sus votos en el parlamento autónomo, permiten un gobierno balear de “izquierda plural”– ha abierto el camino a un Pacto de Progreso entre el PSOE, el PSM y Esquerra

*Una nueva oleada intenta colonizar el interior con residencias de baja densidad y campos de golf mientras instala cada vez más puertos deportivos*

*La reacción social que dice 'basta' -'ni una cama más', como en Lanzarote surge tanto de la consciencia de lo perdido como de lo que aún se puede salvar*

Unida, que incluye por primera vez a los Verdes de Mallorca (que se presentaron en coalición con EU) y Eivissa (que concurren con una candidatura unitaria de progreso). El pacto también incluye a los consejos insulares de Menorca, donde l'Entesssa de l'Esquerra (entre el PSOE, PSM y EU-Esquerra Menorquina) tienen mayoría absoluta, y el de Eivissa y Formentera, donde lo tiene el Pacte de Progrés (entre PSOE, PSM, Esquerra Unida, el Verds y la Coordinadora d'Organitzacions Progressistes). El pacto ha generado tanto entusiasmo democrático entre la ciudadanía progresista de las islas como desconcierto en los grandes medios de comunicación del Estado que, como *El País*, han destacado el descaro de haber desalojado del gobierno al partido más votado y han subrayado la variopinta policromía de las fuerzas políticas que lo han suscrito, dando a entender que tal colección de advenedizos no podrá responder a los complejos desafíos de la comunidad balear.

La reticencia de los poderes fácticos refleja dos cosas bastante significativas. En primer lugar, la irritación por la pérdida de influencia de las grandes familias, que no sólo controlaban el corrupto gobierno del PP sino también a la pacata y desorientada oposición del PSOE balear anterior a su reciente renovación. Una buena limpieza democrática del Estado, hasta los bajos fondos, no es precisamente de su agrado (incluso si se produce sólo en una pequeña comunidad autónoma). Pero también expresa su ceguera, o su desazón, ante la traslación del nexo entre economía y medio ambiente al centro de la discusión política.

Renovación democrática y reorientación sostenibilista son precisamente los dos ingredientes cuya sinergia explica el imprevisto revés de los poderes fácticos en esta comunidad autónoma. La entrada en escena del Pacto de Progreso y las prioridades que ha establecido, son bien claras: paralización de campos de golf y de las maniobras urbanísticas especulativas que suelen esconder; limitación de los puertos deportivos y creación de reservas marinas protegidas –por ejemplo, al noreste de la bahía de Palma–; declaración de Parque Natural de la sierra de Tramuntana de Mallorca; protección de Ses Salines d'Eivissa; moratoria en la construcción de autopistas y relanzamiento del tren y el tranvía; pacificación del tráfico en las ciudades; impulso a la reducción y reciclaje de basuras y al ahorro del agua.

Pero el ejemplo más revelador es, por su novedad, el debate sobre la ecotasa turística. Los propios empresarios de Menorca han pedido al nuevo Consejo de Turismo balear la aplicación de una ecota-

sa turística que se cobrará en las llegadas al aeropuerto y sobre el alquiler de coches. Su importe se destinará íntegramente a medidas de protección ambiental, dentro del programa de la UNESCO que ha declarado a esta isla Reserva de la Biosfera. Inmediatamente, la ecotasa se ha convertido en una prioridad política para toda la comunidad balear, pese a la reticencia de los hoteleros de Eivissa y Mallorca. En un debate con el presidente de los empresarios turísticos mallorquines publicado en la prensa balear, el director general de Greenpeace, Xavier Pastor, presentaba explícitamente la ecotasa turística como un instrumento para *detener el crecimiento* constante en la afluencia de turistas y reducir el consumo de recursos por cada plaza turística ofrecida (agua, suelo, energía, etc.).

El nuevo presidente de la comunidad, Francesc Antich, se ha declarado favorable a la idea y ha iniciado los estudios jurídicos para la aplicación de una ecotasa de mil quinientas pesetas por viaje turístico en el año 2001. El eco ha resonado en el otro archipiélago: en Lanzarote, siete ayuntamientos y el propio Cabildo han propuesto una ecotasa de diez euros por turista destinados a la protección ambiental de su isla (que también es Reserva de la Biosfera). Es la primera vez que ocurre algo así en las fronteras del Estado español. Mientras en Baleares y Canarias ya se habla de frenar el crecimiento y reorientar el modelo de desarrollo, en otras partes aún predominan las fórmulas retóricas de un “crecimiento sostenible” autocontradictorio o, lisa y llanamente, el rechazo a cualquier cuestionamiento de la economía “realmente existente”.

En esos otros contextos, los esfuerzos ecologistas chocan aún con importantes barreras a la percepción social de la insostenibilidad económico-ecológica de sus respectivos modelos de producción y consumo. Eso parece subrayar la importancia de la difuminación colectiva de los límites territoriales concretos, especialmente cuando el perímetro de las identidades comunitarias y las fronteras políticas no coinciden con los de sistemas naturales claros y definidos. Los límites de las cuencas hidrográficas se cruzan con los del sistema de ciudades, los flujos de actividad económica y movilidad de personas, o con las diversas estructuras agrarias, ganaderas y forestales, sin que coincidan con los ámbitos políticos de decisión, etc. La vida social se desarrolla en un entorno cultural e identitario de límites naturales difusos, mientras la espiral consumista devora recursos y territorios sin confrontarse realmente con el deterioro de los sistemas naturales que la sustentan. A diferencia de realidades insulares, como las de Baleares o Canarias, la Península Ibérica aún

*Hay que subrayar el papel mediador desarrollado en Baleares por los grupos ecologistas y ciudadanos para convertir la relación con el medio en un tema central*

parece demasiado extensa territorialmente, y demasiado diversa económicamente, para facilitar esa percepción.

*La renovación de la cúpula del PSOE en las primarias ha catalizado una dinámica de renovación democrática que ha enlazado con la cultura de la sostenibilidad*

Pero más allá de los hechos económicos y ecológicos en bruto, hay que subrayar el papel mediador desarrollado en Baleares por los grupos ecologistas y ciudadanos que están convirtiendo la relación con el medio ambiente en un tema central. Ha sido su paciente labor de muchos años la que ha permitido *trabar en ámbitos territoriales coherentes* las demandas y propuestas socioecológicas que ahora emergen a la consciencia pública. Y ha sido la renovación de la cúpula local del PSOE, por el voto de las bases en las primarias, la que ha catalizado una dinámica política de renovación democrática que ha enlazado sinérgicamente con la cultura de la sostenibilidad. El contraste de todo eso con el resto del país parece sugerir que el mayor tapón al cambio sociopolítico es la incapacidad del PSOE para regenerarse saliendo de la ciénaga del felipismo.

De repente, un desconocido llamado Francesch Antic empieza a romper los patéticos moldes a los que nos tienen acostumbrados los barones del PSOE, hablando con elogioso respeto de las demás fuerzas políticas, asumiendo en la práctica un discurso de “izquierda plural”, sin hegemonías ni hipotecas previas, y afirmando con orgullo que su gobierno está formado por gente corriente que, tras cumplir una tarea, aspira a volver a su vida privada de siempre. Automáticamente Esquerra Unida, dirigida por un Eberhard Grosske que ha liderado desde el parlamento la denuncia de la corrupción, encuentra su lugar en esa izquierda plural. Los Verdes, que con Joan Buades habían desarrollado desde Eivissa incansables denuncias de los trapicheos del PP y la insostenible deriva de la economía balear, han asumido, con Margalida Rosselló, la gestión de una Conselleria de Medio Ambiente balear ahora notablemente protagonista. La presidenta del Consejo Insular de Menorca, Joana Barceló, y la de Eivissa y Formentera, Pilar Costa, conectan con ese discurso ecologista de izquierdas que no quiere dejar escapar la oportunidad de cambiar de rumbo la realidad.

En Baleares, la gente está descubriendo de pronto que hay tareas demasiado importantes y cotidianas para que la política siga siendo ese cansino espectáculo de vacías peleas mediáticas, sazonado de mezquinos intereses personales, que nos tiene tan hartos. Esperemos que dure. Mientras tanto, tienen nuestra simpatía y apoyo.